



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)**

Demandante: AMPARO DE JESÚS ÁLVAREZ ÁLVAREZ  
Interviniente: MARÍA ADRIANA RAMÍREZ HERRERA  
Litis por pasiva: FABIO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ  
Demandada: ACP COLPENSIONES  
Radicado: 05001 31 05 009 2015 00563 01  
Sentencia: S-095

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por la interviniente MARÍA ADRIANA RAMÍREZ HERRERA y por el litisconsorte necesario por pasiva FABIO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ, así como el grado jurisdiccional de Consulta que opera a favor de COLPENSIONES, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín el día 6 de julio de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES**

AMPARO DE JESÚS ÁLVAREZ ÁLVAREZ demandó a COLPENSIONES para que sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de

sobrevivientes en calidad de cónyuge del Sr. FABIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ CORREA a partir del 28 de febrero de 2013, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y las costas del proceso.

### **LOS HECHOS:**

Expone como fundamento de sus peticiones, que su esposo FABIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ CORREA falleció el 28 de febrero de 2013; que estuvieron casados desde el 17 de agosto de 1957 sin lugar a separaciones; que de dicha unión nacieron 7 hijos; que aquel estaba pensionado por vejez desde el reconocimiento que le hizo el ISS según la Resolución 11128 de 1998, en la que se ordenó el pago de la pensión a partir del 1 de abril de 1998 en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente; que solicitó la pensión de sobrevivientes el 24 de abril de 2013; que también se presentó a reclamar la prestación la señora MARÍA ADRIANA RAMÍREZ HERRERA alegando su condición de compañera permanente; y que COLPENSIONES les negó la prestación a través de la Resolución VPB 2298 del 20 de enero de 2015.

### **INTERVENCIÓN AD EXCLUDENDUM**

La señora MARÍA ADRIANA GONZÁLEZ RAMÍREZ presentó demanda en calidad de interviniente ad excludendum pretendiendo para sí el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor FABIO DE LA CRUZ, junto con los intereses de mora, la indexación y las costas del proceso. Solicitud que fundamenta alegando su condición de compañera permanente del causante desde el año 1996 hasta de la fecha de la muerte, tiempo durante el cual nació un hijo, FABIO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ y desconociendo la relación que la demandante principal dice tener, ya que desde por lo menos hace 22 años el causante no vivía con ella.

## **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

COLPENSIONES se ocupó de contestar la demanda de cada una de las reclamantes oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones por falta de cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos. Sobre los hechos, acepta lo relacionado con el reconocimiento de la pensión de vejez al causante y todo lo relacionado con la solicitud de pensión de sobrevivientes y las decisiones de la entidad mediante las cuales se negó lo pretendido, advirtiendo que la convivencia que indica cada una de ellas debe ser probada en el curso del proceso. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación por ausencia de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, buena fe, improcedencia de intereses de mora, imposibilidad de indexar las condenas, imposibilidad de condena en costas, prescripción, compensación y descuento del retroactivo por salud.

## **LITISCONSORCIO NECESARIO POR PASIVA**

FABIO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ fue vinculado al proceso en calidad de litisconsorcio necesario por pasiva ante el reconocimiento a su favor del 50% de la pensión en calidad de hijo del causante. En esa condición se ocupó de contestar la demanda indicando que la demandante no convivió con el causante durante los últimos 5 años de vida, motivo por el cual la prestación le debe ser reconocida en un 50% hasta el momento de cumplir los 25 años de edad y el otro 50% a MARÍA ADRIANA RAMÍREZ HERRERA, quien posteriormente le deberá acrecer a 100%.

## **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 6 de julio de 2022, el Juzgado 9º Laboral del Circuito de Medellín, CONDENÓ a COLPENSIONES a reconocer y pagar a la señora AMPARO DE JESÚS ÁLVAREZ ÁLVAREZ, la pensión de

sobrevivientes por el fallecimiento del señor FABIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ CORREA, en un 50% entre el 1 de marzo de 2013 y el 1 de septiembre de 2015 y en un 100% desde el 2 de septiembre de 2015 en adelante, lo que implica un retroactivo pensional a su favor de \$81'731.828, junto con la respectiva indexación. Dispuso, además, ABSOLVER a COLPENSIONES de las pretensiones formuladas en su contra por MARÍA ADRIANA RAMÍREZ HERRERA, a quien condenó en costas, fijando como agencias en derecho el equivalente al 5% de lo ordenado pagar.

### **DEL RECURSO DE APELACIÓN**

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado del **litisconsorte necesario por pasiva FABIO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ**, presentó recurso de apelación indicando que el despacho fundamenta su sentencia en argumentos que no son claros y se evidencia error en la asignación del valor probatorio de las pruebas allegadas y practicadas en juicio, ya que nunca se demostró en el proceso la dependencia económica de la demandante ni la convivencia hasta el momento efectivo de la muerte. No se tuvieron en cuenta las aseveraciones de la demandante en su interrogatorio de parte en el sentido de que es claro que se pretende ocultar y amañar información para obtener el derecho pensional, como decir que no conocía a la señora ADRIANA, pero sí saber de la existencia de un hijo. Además, la sentencia se fundamenta en el testimonio de personas con intereses particulares en las resultas del proceso, sumado a que no deben ser valorados como lo aceptó el Juez al no dar cuenta certera de la convivencia en los últimos 5 años y la dependencia económica.

Así mismo el despacho hace referencia a unas pruebas documentales que no tienen la conducencia suficiente para demostrar una real y efectiva convivencia con ánimo de permanencia, como lo es un certificado de pago de exequias, situación que no es suficiente para acreditar la existencia del núcleo familiar y no se dio cumplimiento a

los requisitos exigidos por la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, contrario a lo ocurrido en el caso de la señora MARÍA ADRIANA RAMÍREZ HERRERA, quien reunió pruebas que dan fe y credibilidad de la convivencia con vocación de permanencia conformada con el causante por más de 15 años anteriores hasta la fecha del fallecimiento.

Así mismo, el apoderado de la **interveniente MARÍA ADRIANA RAMÍREZ HERRERA** difiere de la sentencia en cuanto al derecho a reconocer la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional en calidad de compañera permanente del causante y la valoración de las pruebas. Señala que existe línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional donde se establece que se tiene que probar la convivencia real y efectiva por lo menos en los 5 años anteriores a la fecha del fallecimiento; en el presente caso, se probó su convivencia con el fallecido con la prueba documental y testimonial. Se estableció que una vez fallecido el señor FABIO DE LA CRUZ inmediatamente cambiaron sus condiciones específicamente en temas de salud y vivienda quedando así desprotegida, caso contrario de la demandante, ya que posterior al fallecimiento del causante se afilió al sistema de salud como cotizante y adicional a eso era pensionada tal y como lo manifestó en su declaración de parte. Se probó con certificación de la Nueva EPS la condición de beneficiario del señor GONZALEZ RAMÍREZ; además, es claro que la demandante AMPARO ÁLVAREZ existe un vínculo matrimonial, pero eso no quita el derecho que le corresponde ante la posibilidad legal de que la pensión sea compartida, por lo que solicita se reconozcan los 17 años de convivencia acreditados desde el año 1996 hasta la fecha de fallecimiento del causante, lo que además fue corroborado con la declaración de parte de la propia señora AMPARO quien aceptó el alejamiento con su esposo .

De las pruebas aportadas se acredita una convivencia y ayuda mutua, incluyendo asistencias del causante a reuniones de su hijo a la

institución educativa, además de que era proveedor de alimentos, salud, vivienda y recreación. Se probó, además, que era un padre excepcional y que nunca desasistió a este núcleo familiar de esos servicios y del ingreso económico en general, cuya dependencia económica también quedó acreditada.

Solicita el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes como compañera permanente en la proporción que se disponga por el Tribunal, con el retroactivo pensional según el porcentaje asignado, así como la indexación y que se incluya la mesada 14 por tratarse de una prestación reconocida previamente.

Conoce la Sala del asunto igualmente por **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, el apoderado de la interviniente ad excludendum presentó alegatos de conclusión a través de los cuales solicita se declare su calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes reclamada y se ordene su reconocimiento, en un todo o en parte según el porcentaje que el Tribunal estime.

En igual sentido se pronunció el apoderado del litisconsorte necesario por pasiva, solicitando el reconocimiento de la pensión a favor de la señora MARÍA ADRIANA por haber demostrado un tiempo de convivencia superior a 5 años con anterioridad a la fecha de la muerte del causante.

En el caso de la demandante, lo que solicita es que se confirme en su integridad el fallo de primera instancia según el material probatorio recaudado en el proceso, que da cuenta de su derecho a la pensión de sobrevivientes en un porcentaje equivalente al 100%.

### **CONSIDERACIONES:**

Atendiendo a los recursos de apelación presentados y, además, en virtud del grado jurisdiccional de CONSULTA que opera a favor de COLPENSIONES, debe la Sala dilucidar si las señoras AMPARO DE JESÚS ÁLVAREZ ÁLVAREZ y/o MARÍA ADRIANA RAMÍREZ HERRERA, reúnen los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para ser consideradas beneficiarias de la pensión de sobrevivientes causada con ocasión de quien dicen era su cónyuge y compañero permanente, respectivamente, el señor FABIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ CORREA, quien falleció el 28 de febrero de 2013.

Como temas accesorios, ligados directamente al reconocimiento pensional por parte del a quo en favor de AMPARO DE JESÚS ÁLVAREZ ÁLVAREZ, y según lo que se defina en cuanto al problema jurídico principal, se analizará, en virtud del grado de CONSULTA que opera a favor de COLPENSIONES, lo referente al retroactivo pensional, así como la condena por concepto indexación.

Si bien el apoderado del litisconsorte necesario por pasiva FABIO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ también presentó recurso de apelación, su argumentación tuvo como propósito el reconocimiento de la pensión a favor de su madre MARÍA ADRIANA, sin que se hiciera referencia alguna a sus intereses propios y personales; por tal motivo y en virtud del principio de consonancia que rige el procedimiento laboral, su situación particular no sufrirá modificación alguna.

En cualquier caso, aunque se llegare a considerar la posibilidad de analizar su derecho, basta con indicar que COLPENSIONES le pagó la prestación hasta el cumplimiento de los 18 años de edad, sin que exista prueba alguna mediante la cual se demuestre que con posterioridad a ello estuviere estudiando, lo que le habría permitido disfrutar de la pensión hasta los 25 años de edad.

Antes de proseguir con la resolución de los temas planteados, interesa dejar en claro que las siguientes circunstancias fácticas no han sido objeto de discusión dentro del proceso:

- El Sr. FABIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ CORREA falleció el 28 de febrero de 2013 (página 30 expediente escaneado);
- El causante había contraído matrimonio con AMPARO DE JESÚS ÁLVAREZ ÁLVAREZ, el 15 de agosto de 1957 (pág. 14);
- De dicha unión nacieron 7 hijos: FABIO ALONSO GONZÁLEZ ÁLVAREZ el 5 de abril de 1958, CARLOS MARIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ el 12 de marzo de 1959, ELKIN ELÍAS GONZÁLEZ ÁLVAREZ el 5 de julio de 1960, LUÍS ADOLFO GONZÁLEZ ÁLVAREZ el 5 de julio de 1960, JULIO CÉSAR GONZÁLEZ ÁLVAREZ el 4 de septiembre de 1961, RAMIRO GONZÁLEZ ÁLVAREZ el 16 de octubre de 1962 y VÍCTOR LEÓN GONZÁLEZ ÁLVAREZ el 16 de octubre de 1963.
- A reclamar la pensión de sobreviviente se presentó la cónyuge el día 24 de abril de 2013, e igualmente lo hizo la señora MARÍA ADRIANA RAMÍREZ HERRERA el 21 de mayo de 2013 aduciendo su calidad de compañera permanente. COLPENSIONES les negó la prestación mediante las resoluciones GNR 258086 del 15 de octubre de 2013, GNR 197938 del 3 de junio de 2014 y VPB 2298 del 20 de enero de 2015, por el hecho de que no era posible establecer el tiempo de convivencia de las reclamantes; allí mismo se ordenó el reconocimiento del 50% de la prestación a FABIO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ en calidad de hijo del causante y se dejó en suspenso el restante 50% ante la controversia presentada.
- El señor FABIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ CORREA disfrutó de una pensión de vejez que le fue reconocida por el entonces INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES mediante Resolución 11128 de 1998 a



partir del 1 de abril de 1998; prestación reconocida en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente.

Conforme a lo anterior, no hay duda que el señor OCTAVIO RESTREPO RAMÍREZ dejó causada la pensión de sobrevivientes en favor de aquella persona que acredite tener el mejor derecho, es decir, la calidad de beneficiaria de la prestación en los términos del artículo 13 de la ley 797 de 2003, especialmente en lo que tiene que ver con la exigencia de los 5 años de convivencia anteriores al fallecimiento, pues el requisito de las 50 semanas cotizadas en los 3 años previos a ese hecho no resulta necesario dada su calidad de pensionado.

### **Requisito de convivencia según la ley 797 de 2003.**

Como se advirtió, a efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos legales para hacerse beneficiario (a) de la pensión de sobrevivientes, especialmente en lo que tiene que ver con la convivencia legalmente exigida, es preciso aplicar la Ley 797 de 2003, cuyo artículo 13 enuncia quiénes son los beneficiarios de tal prestación, exigiéndose en el literal a,) que el cónyuge o compañero(a) permanente supérstite “... *deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de 5 años continuos con anterioridad a su muerte*”.

En este sentido, es menester recordar que a través de sentencias tales como las radicadas al número 41637 de 2012; 44454 de 2013; 42193 de 2014 y SL 16419 de 2017, la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de Casación Laboral, determinó que el cónyuge con vínculo matrimonial vigente, es beneficiario de la pensión de sobrevivientes si acredita haber tenido vida en común con el causante por un lapso no inferior a 5 años **en cualquier tiempo**.

Criterio que se ha reafirmado en innumerables sentencias como la SL 1399 del 25 de abril de 2018, Rad. 45799; SL 2232 del 29 de mayo de 2019 rad. 58324; SL 5159 del 27 de noviembre de 2019, rad. 79.539, o la SL 2746 del 22 de julio de 2020, para citar solo algunas, en punto a que no existe condicionamiento adicional alguno distinto a la acreditación del vínculo matrimonial vigente. En la última de ellas, por ejemplo, expresó:

*“En torno a este punto, importa a la Corte destacar que si bien esta Sala en la interpretación del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, ha entendido que tanto la cónyuge como la compañera permanente deben cumplir con el requisito de convivencia hasta la muerte y por un lapso no inferior a 5 años continuos con anterioridad al fallecimiento, cuando ocurra la muerte del pensionado, en una interpretación armónica con el inciso 3 del literal b) ibídem, tratándose del evento del cónyuge separado de hecho, como es aquí el caso, **ha precisado que la convivencia de los 5 años puede verificarse en cualquier tiempo.** Esto, por cuanto el legislador, cuando se refiere a la posibilidad del cónyuge de acceder al beneficio prestacional periódico cuando medie «separación de hecho», naturalmente presupone que no hay vida en común de la pareja de casados al momento de la muerte. En efecto, según la jurisprudencia de la Sala, el cónyuge con unión matrimonial vigente, independientemente de si se encuentra separado de hecho o no de su consorte, puede reclamar legítimamente la pensión de sobrevivientes, siempre que hubiere convivido con el pensionado causante durante un interregno no inferior a 5 años, en cualquier tiempo.”*

Bajo esta perspectiva, se ha pronunciado la Corte de nuevo y de manera más directa, en sentencias como la SL 2010 del 05 de junio de 2019, SL 5169 del 27 de noviembre de 2019, SL359 del 3 de febrero de 2021, SL1476 del 14 de abril de 2021, SL1707 del 21 de abril de 2021, SL 5259 del 29 de septiembre de 2021, SL 997 del 9 de marzo de 2022 o SL 2257 del 24 de mayo de 2022 en las que enfatiza, además, que el artículo 13 de la ley 797 de 2003 sólo exige para el cónyuge supérstite la convivencia de los 5 años en cualquier

tiempo, sin que ello implique que los lazos afectivos y la comunidad solidaria permanezcan vigentes en la pareja hasta el momento de fallecimiento de uno de los contrayentes, pues no es ello una exigencia legal para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes.

Con base en lo anterior, procederá la Sala a determinar si las pruebas allegadas al proceso permiten establecer, i) si entre AMPARO DE JESÚS ÁLVAREZ ÁLVAREZ y FABIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ CORREA existió convivencia como esposos por más de 5 años en cualquier tiempo, sin que sea imperativo, se repite, exigir la persistencia de lazos afectivos y ayuda mutua hasta el momento del fallecimiento, y ii) si entre MARÍA ADRIANA RAMÍREZ HERRERA – en calidad de compañera permanente - y el mismo señor FABIO DE LA CRUZ, existió una convivencia en los últimos 5 años inmediatamente anteriores a su muerte.

**1.** Derecho que reclama AMPARO DE JESÚS ÁLVAREZ ÁLVAREZ en calidad de cónyuge.

Bajo el entendido del criterio jurisprudencial citado, la decisión en cuanto a esta beneficiaria respecta deberá ser confirmada, ya que la prueba documental y los testigos traídos al proceso, dan cuenta de la realidad efectiva de ese tiempo de convivencia.

En primer lugar, en cuanto a la prueba documental y como situaciones relevantes tenemos lo siguiente:

1. Se logró acreditar que la pareja contrajo matrimonio el 15 de agosto de 1957; que ese vínculo en términos legales perduró hasta el día de la muerte del causante; y que de dicha unión nacieron 7 hijos, el primero de ellos el 5 de abril de 1958 y el último el 15 de noviembre de 1963.

2. Mediante Resoluciones GNR 258086 del 15 de octubre de 2013, GNR 197938 del 3 de junio de 2014 y VPB 2298 del 20 de enero de 2015, indicó la entidad que la señora AMPARO DE JESÚS no tenía derecho a la pensión reclamada, teniendo en cuenta que había otra persona solicitando la prestación, al no existir claridad en torno a los tiempos de convivencia.

3. De otro lado, se conoce la Resolución GNR 181764 del 15 de julio de 2013 mediante la cual COLPENSIONES le concedió a la cónyuge del causante el auxilio funerario por valor de \$2´947.500 por los gastos en el servicio exequial en los que incurrió según factura de venta de la Funeraria Nazareno (página 63).

4. Se aportó ficha de encuesta y clasificación del SISBEN en la que consta que el grupo familiar conformado por el causante, su esposa y tres de sus hijos, aparecen registrados en el nivel tres. Fecha encuesta 2 de junio de 2006 y actualización de mayo 25 de 2010 (Página 70).

5. Que como consecuencia del accidente de tránsito en el que falleció el señor FABIO DE JESÚS, la Compañía QBE SEGUROS S.A. le reconoció a su esposa y a cada uno de sus hijos una suma de dinero equivalente a \$7´368.750 a la primera y de \$1´052.678 a cada uno de los segundos (Página 302).

6. Se aportó copia de los trámites judiciales adelantados ante el Juzgado 16 Civil Municipal de Medellín en el año 2009 de restitución de inmueble arrendado y del Juzgado 28 Civil Municipal de Medellín, dentro de un proceso de fijación de canon de arrendamiento en el año 2012, en ambos casos adelantados en contra de la demandante y el causante.

De otro lado, en cuanto a la prueba testimonial que se recibió, encontramos que tanto ZULMA ARANGO CASTAÑO, como JOHN JAIRO

MUÑOZ y DOLLY DEL SOCORRO URIBE CORTÉS, fueron coincidentes en señalar que la demandante y su cónyuge siempre convivieron, y que lo hicieron hasta la fecha de su muerte, época para la cual aquel se dedicaba a la venta de dulces en un quisco que tenía ubicado en las proximidades de la UNIVERSIDAD EAFIT.

Se trata de testigos claros, coincidentes, espontáneos y con conocimiento directo acerca de los hechos que cada uno de ellos relata, por su vínculo familiar o de amistad que los une, advirtiendo incluso que algunos de ellos vivieron en la misma casa durante el tiempo en que se desarrolló la convivencia de la pareja en mención.

De esas declaraciones se advierten algunos hechos relevantes como los siguientes: i) el causante siempre fue comerciante, primero tuvo una heladería, luego una panadería y en los últimos años, aproximadamente desde el año 2000, vendía productos de tienda, no solo cerca a la U. EAFIT, sino también por la 65 con la 10 a las afueras de una fábrica; ii) la panadería que mencionan la tuvo en el Municipio de La Pintada en los años 90 y a ella él iba y regresaba, permanecía unos 15 días y volvía, o se quedaba 8 días y regresaba; iii) todos ellos dijeron no conocer a la interviniente y a su hijo; iv) que tanto la demandante como el causante eran pensionados y entre ellos se repartían los gastos del hogar; y v) la convivencia como pareja se desarrolló en una casa ubicada en el barrio COLOMBIA de la ciudad de Medellín.

Se destaca de manera particular la afirmación del señor J. J. MUÑOZ, quien dijo haber vivido con ellos aproximadamente entre 2003 y 2012, indicando que *“Cuando él falleció, hacía como 5 o 6 meses me había ido, me había independizado y me fui a vivir en bello. Yo recién ido de allá fue que FABIO murió. En ese momento también vivía FABIO ALONSO, estaba RAMIRO, JULIO iba a veces y se quedaba unos días.”* Consecuente con lo anterior, no queda duda para la Sala de que la pareja de esposos conformada por FABIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ

CORREA y AMPARO DE JESÚS ÁLVAREZ ÁLVAREZ convivió por más de 5 años, lo que permite en su caso el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que se reclama.

**2.** Derecho que discute MARÍA ADRIANA RAMÍREZ HERRERA en calidad de compañera permanente.

No puede olvidarse que la convivencia, en su significado natural y obvio, es la acción de vivir uno en compañía de otro, lo cual incluye compromisos de ayuda y socorro mutuos en diversas esferas de la vida: en lo material y lo moral, lo económico y lo afectivo; la compañía contra la soledad y el abandono; la solidaridad de cuerpo y alma, el acompañamiento en la cotidianidad y en las necesidades vitales; los lazos de auxilio y adhesión en los avatares de la vida, el disfrute de los logros comunes; el soporte para la superación del otro y de la pareja, etc.

En criterio de la Sala, con apego al conjunto de pruebas aportado al proceso, la convivencia de la forma descrita no se logra acreditar, así como tampoco el cumplimiento de los requisitos que exige la ley para el reconocimiento de la prestación reclamada, en tanto no demostró que hiciera vida en común con el causante por más de 5 años hasta la fecha de su muerte. Si bien es cierto, entre ellos pudo haber existido una relación sentimental, de convivencia incluso, también lo es que al momento de la muerte, FABIO DE LA CRUZ y MARÍA ADRIANA no vivían juntos; la convivencia bajo el mismo techo pudo haberse desarrollado entre los años 1996 y 2000, más no durante los 5 años previos al fallecimiento, pues en esa época resulta claro que el causante vivió con su cónyuge y algunos de sus hijos producto del matrimonio.

Y para alcanzar esa conclusión, la Sala se apoya en las declaraciones de los testigos de la parte actora vistas previamente, además de las

siguientes situaciones derivadas del material probatorio que en su conjunto se logró recaudar.

1. En cuanto a la prueba documental, se destaca el registro civil de nacimiento del hijo de la pareja y litisconsorte necesario por pasiva, FABIO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ, quien nació el 2 de septiembre de 1997

2. De otro lado, si bien aparece un certificado expedido por la NUEVA EPS del 7 de mayo de 2018 en el que consta que la señora MARÍA ADRIANA estuvo registrada como beneficiaria del causante con fecha de afiliación el 1 de agosto de 2008, resulta que esa información fue desvirtuada por la propia entidad ante un requerimiento explícito que en tal sentido le realizó el Juzgado de Primera Instancia.

Según el contenido del archivo 21RespuestaRequerimiento del expediente digital, el Director de Gestión Operativa de la Nueva EPS *"una vez revisado su caso y validada la información en nuestro sistema, nos permitimos informar que el señor FABIO DE LA CRUZ GONZALEZ CORREA quien en vida se identificó con cedula de ciudadanía número 3303697 no registró grupo familiar"*.

3. Existen sendas comunicaciones del propio señor FABIO DE LA CRUZ dirigidas al entonces INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el día 14 de mayo de 1998, luego de la notificación de reconocimiento pensional, a través de las cuales solicita el retroactivo de su pensión de vejez y que *"... me haga figurar como beneficiaria del carnet a salud a mi compañera actual ADRIANA MARÍA RAMÍREZ HERRERA... teniendo además tres hijos, de los cuales el menor es producto de nuestra unión. Es mi compañera desde el 15 de marzo de 1996 y mi deseo es apoyarla, aprovechando los servicios que se derivan de mi pensión"*

En ese documento se acredita la existencia de una relación entre ellos, pero en el año 1998, por lo que en principio no sería relevante.

4. En cuanto a las fotografías que se aportan, se trata de documentos sin valor probatorio alguno en tanto se desconoce con certeza quiénes son las personas que allí aparecen y las fechas de cada una de ellas.

5. Del interrogatorio de parte que le fuera practicado a la señora AMPARO DE JESÚS, si bien no se extrae una confesión de tal claridad que por sí sola sea suficiente para entender acreditado el requisito de convivencia que alega la señora MARÍA ADRIANA, de él sí se pueden destacar algunas situaciones que al analizarlas en conjunto con la prueba restante, guardan coherencia y sentido en torno a la realidad de algunos de los años de vida del causante, como el hecho de que hubiera estado viviendo en LA PINTADA y que allí tuvo como negocio una panadería, aunque de su dicho no se desprende información relacionada con las fechas en que esa situación ocurrió.

6. Finalmente, en cuanto a la prueba testimonial, lo que se puede indicar es que con ella no se cumplen el objetivo de tener por demostrado el requisito de convivencia que exige la ley, especialmente por el hecho de que ninguno de los dos testigos que se presentaron con esa finalidad muestran un conocimiento directo, real, claro y contundente respecto de las circunstancias en que se pudo haber desarrollado la vida como pareja de MARÍA ADRIANA y FABIO DE LA CRUZ entre 2008 y 2013.

En el primero caso, el señor WILLIAM TANGARIFE, se trata de una persona con poco conocimiento de los detalles en que se desarrolló la vida de la pareja, quien simplemente se limitó a indicar que cuando los veía, los veía juntos, señalando incluso que *“Él vivió en SUPÍA como hasta el 2012, que yo me haya dado cuenta”*, afirmación, que, aun cuando fuera cierta, no es suficiente para el cumplimiento del requisito legal que se exige en tanto el causante falleció el 28 de febrero de 2013.



En el segundo caso, el señor OSCAR MEJÍA, si bien pudo presenciar algún tiempo de convivencia entre la pareja por su condición de ganadero y propietario de algunas fincas en la zona, ese tiempo se limita a 3 años. Al respecto fija: *“Yo la conocí viviendo con ese señor DON FABIO, ellos vivían al borde de la carretera, yo lo veía ahí en la casa, yo dejaba el carro donde ellos y de ahí me seguía para la finca (...) eso fue por ahí durante 3 años”*. Sin embargo, ocurre que, con posterioridad, su conocimiento viene dado por simples comentarios o por la que la propia MARÍA ADRIANA le contaba, convirtiéndolo en un testigo de oídas que muy escasa utilidad representa para el proceso.

Así las cosas, aunque hubiera afirmado que la convivencia se mantuvo hasta febrero de 2013 cuando aquel falleció, también indicó que solo se veían esporádicamente en el pueblo y lo que sabía era por lo que le habían dicho, destacándose su afirmación en cuanto a que ellos vivían en un barrio que se llama LA VEGA, pero que *“... yo no visitaba ese barrio (...) eso un sector por allá abajo, un sector de mala muerte yo por allá no me meto”*.

Consecuente con lo anterior, para la Sala resulta claro que a la señora MARÍA ADRIANA RAMÍREZ HERRERA no le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que reclama, por cuanto no acreditó de modo convincente la convivencia de 5 años anteriores a la muerte con el Sr. GONZÁLEZ CORREA, motivo por el cual se confirmará la sentencia de primera instancia.

Decisión que incluye lo relacionado con la fecha de reconocimiento pensional (1 de marzo de 2013), el valor de la mesada reconocida (1 SMLMV), el total de mesadas al año (13), y el valor que por concepto de retroactivo pensional se ordenó (\$81'731.828), todo lo cual se encuentra ajustado a derecho.

Se advierte, eso sí, que a COLPENSIONES le asiste la facultad de descontar el valor de los aportes al Sistema de Seguridad Social en

Salud, pues esta consecuencia opera por el solo ministerio de la ley con arreglo al artículo 143 de la Ley 100 de 1993, sobre el retroactivo objeto de condena, tema frente al cual se adicionará al fallo del *a quo*.

También se confirmará la orden de indexar las condenas lo que opera ante la necesidad de actualizar a su valor real las sumas que por concepto de mesadas pensionales han debido pagarse de tiempo atrás y que fuera solicitado como alternativa a la condena por intereses moratorios que no tuvo vocación de prosperidad.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

### **R E S U E L V E:**

**CONFIRMA** la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín el día 6 de julio de 2022 y la **ADICIONA** en el sentido de **AUTORIZAR** a COLPENSIONES descontar del retroactivo pensional reconocido a la demandante, las sumas que por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud en Salud, esté en la obligación de trasladar a la EPS donde estuviere afiliada en la forma como se dispuso en la parte motiva

Sin costas en esta instancia. Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado

Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **74622063a9e956c3a355046c090cdc92e18650c0c6ce8be986db0d6e3e60d354**

Documento generado en 13/04/2023 01:48:27 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**